Laura Calderón

Tinta Roja nº20, invierno 2012-2013

Es la tercera vez que la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Estado colombiano se ven las caras en una mesa de negociación. Lo hicieron en 1984 en el llamado “acuerdo de la Uribe” con el entonces presidente Belisario Betancourt y que terminaría con el exterminio de la Unión Patriótica, partido político que de esas conversaciones nació como brazo político donde no sólo la insurgencia podía participar, sino todos los actores sociales y políticos que buscaban la paz. Más de 5000 militantes asesinado/as o desaparecidos/as marca un record atroz para la historia de la clase obrera en lo que a terrorismo de Estado se refiere.

En 1998 se firmaron los “diálogos de paz” en San Vicente del Cagüan, con el entonces presidente Andrés Pastrana. Pero el plan del Estado y la oligarquía colombiana sublevada a las ordenes de Estados Unidos, era el de ganar tiempo en la mesa de diálogos mientras preparaba mejor la fuerza pública con los millones de dólares del “Plan Colombia”. El dinero de la Casa Blanca no sólo lo invertían en el conflicto interno colombiano sino que ayudaba a consolidar las políticas expansionistas del imperialismo en la zona, así el gobierno abandonaba la mesa de negociación en 2002 evidenciando los verdaderos motivos que lo habían llevado a ella y que en todo caso no eran los de acordar la paz.

Ahora en 2012 el Estado colombiano en cabeza de su presidente Juan Manuel Santos, suscribe con las FARC-EP un Acuerdo de Paz trabajado desde mayo, con un acercamiento de las partes de forma secreta gestado en La Habana, Cuba.

Para septiembre del presente año el gobierno colombiano y las FARC-EP hacían pública la instalación de la mesa de negociaciones y la firma del llamado Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, con el acompañamiento de Cuba y Noruega como garantes y Venezuela y Chile como acompañantes.

